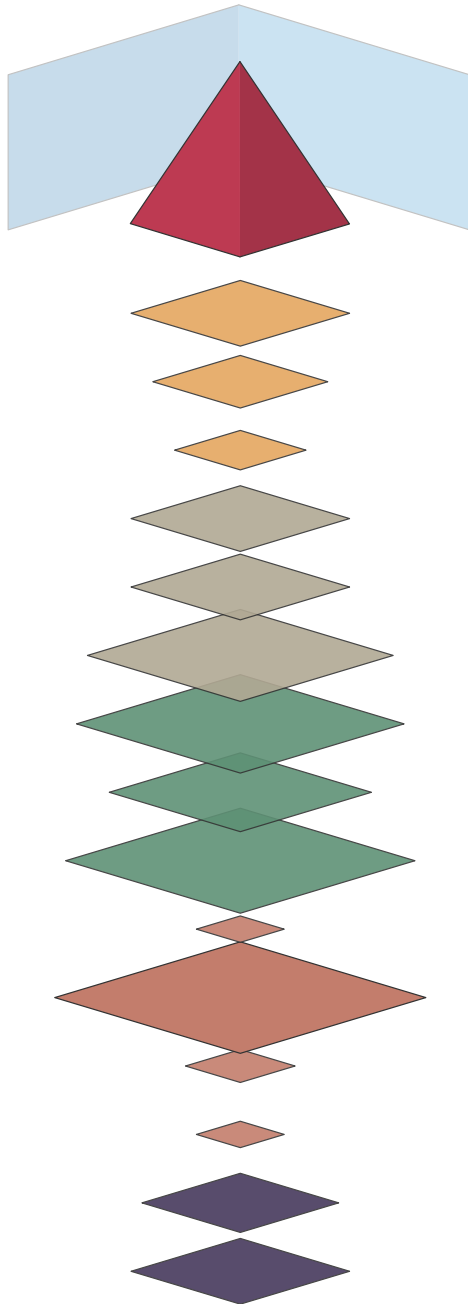




# BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)



4,95

## PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

98.º de 193 países

22.º de 35 países americanos

10.º de 12 países de América del Sur



### MERCADOS CRIMINALES 5,00

TRATA DE PERSONAS	5,00
TRÁFICO DE PERSONAS	4,00
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	3,00
TRÁFICO DE ARMAS	5,00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	5,00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	7,00
DELITOS CONTRA LA FLORA	7,50
DELITOS CONTRA LA FAUNA	6,00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	8,00
COMERCIO DE HEROÍNA	2,00
COMERCIO DE COCAÍNA	8,50
COMERCIO DE CANNABIS	2,50
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	2,00
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	4,50
DELITOS FINANCIEROS	5,00



### ACTORES CRIMINALES 4,90

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	4,00
REDES CRIMINALES	4,50
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	6,00
ACTORES EXTRANJEROS	5,00
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	5,00



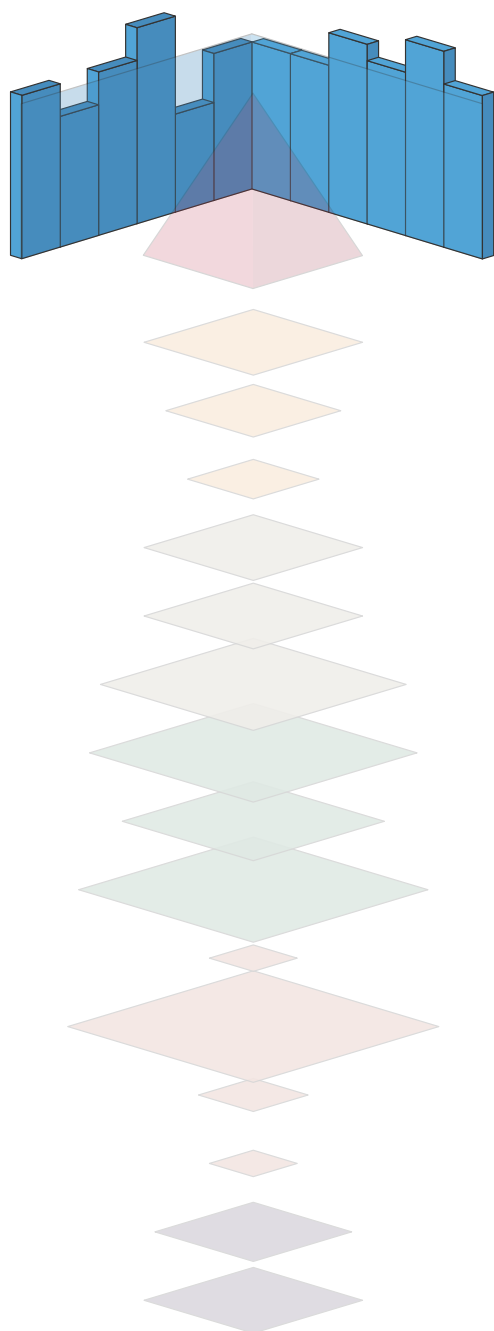
4,83

## PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





# BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)



4,83

## PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

98.º de 193 países

20.º de 35 países americanos

7.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	5,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	3,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	4,50
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	5,50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	5,00
PREVENCIÓN	6,00
ACTORES NO ESTATALES	5,00



4,95

## PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 5,00



ACTORES CRIMINALES 4,90



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

# CRIMINALIDAD

## MERCADOS CRIMINALES

### PERSONAS

Bolivia sigue siendo un país de tránsito y destino para personas de múltiples nacionalidades. Los traficantes operan redes de trabajo forzado y explotación dentro de Bolivia y en los países vecinos, siendo las mujeres y los niños los más vulnerables. Casi tres cuartas partes de las víctimas rescatadas pertenecen a esta categoría. Aunque existen leyes contra la trata de personas, su aplicación por parte del Gobierno es deficiente y las autoridades locales luchan por hacer cumplir las leyes, debido a la falta de financiación, concienciación o interés. La pandemia de la COVID-19 y la crisis migratoria venezolana han aumentado el número de refugiados vulnerables a la trata de personas, pero los indígenas pobres de las zonas rurales son los más afectados.

Aunque Bolivia no es un destino importante, desempeña un papel crucial como lugar de tránsito para las personas que quieren salir de Brasil y entrar en Perú de camino a América del Norte, así como para las personas que quieren llegar a Argentina y Chile. En la frontera con Perú tiene lugar una notable actividad de contrabando, con comunidades indígenas implicadas en el proceso de facilitación. La crisis venezolana ha impulsado aún más el mercado del tráfico de personas. Las bandas criminales se aprovechan de la situación, extorsionando o secuestrando a personas que transitan por pasos irregulares. Se cree que las mafias venezolanas están detrás de este flujo transnacional de personas, operando en el país a través de aliados locales. Los informes indican que las personas objeto de contrabando suelen ser explotadas para el tráfico de drogas y el trabajo sexual. También sufren discriminación y xenofobia cuando intentan acceder a servicios básicos.

No se conocen casos de extorsión y cobros ilegales por protección vinculados a grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, el delito es muy poco denunciado, debido a la falta de credibilidad del sistema judicial entre la población.

### TRÁFICO

Bolivia es un país de tránsito para el tráfico de armas, que sirve de puerta de entrada de las armas procedentes de Estados Unidos a las organizaciones delictivas de Brasil y Paraguay. Las mafias transnacionales utilizan el territorio boliviano para suministrar armas a sus filiales y aliados en otros países y los grupos delictivos locales también tienen acceso a estas armas, que a menudo se intercambian en los pasos fronterizos. Sin embargo, el Gobierno boliviano ha hecho poco por hacer cumplir las leyes sobre armas y una parte significativa de las armas en circulación son ilegales, lo que contribuye a aumentar los niveles de violencia.

Durante la pandemia, los métodos de contrabando se hicieron más sofisticados y ha habido informes de bandas brasileñas que han asaltado bases militares bolivianas, lo que ha hecho sospechar de complicidad con funcionarios de bajo rango. Además, se ha denunciado el uso por parte de delincuentes de balas fabricadas por la Fábrica Boliviana de Municiones, lo que apoya la hipótesis de que funcionarios públicos están implicados en este mercado.

Los productos falsificados también se han vuelto cada vez más frecuentes en Bolivia, debido al auge de los mercados informales durante la pandemia. Es habitual encontrar productos electrónicos, prendas de vestir y productos farmacéuticos falsificados, que a menudo se venden abiertamente en ferias y centros comerciales. Las incautaciones en las aduanas bolivianas experimentaron un aumento sustancial en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, pero no se ha identificado ni procesado a ninguna organización delictiva por este delito. Además, en Bolivia se producen bebidas alcohólicas falsificadas en el seno de grupos de tipo mafioso, pero el aumento del contrabando de marcas internacionales puede estar reduciendo los incentivos para producir las a gran escala.

El comercio ilegal de productos sujetos a impuestos especiales también es un problema notable. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por reducir la importación ilegal de estos productos, su impacto económico es enorme, ya que son una opción barata para los bolivianos de bajos ingresos. El mercado es de carácter transnacional, pero los principales actores son locales, sobre todo clanes familiares. Los funcionarios públicos suelen participar en estas actividades, ya sea extorsionando u ofreciendo protección a los contrabandistas. Dado que comunidades enteras dependen del comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, actuar contra estos mercados no resulta políticamente conveniente y prácticamente no se ejercen controles en los mercados callejeros. Los productos sujetos a impuestos especiales que más se comercializan ilícitamente son las bebidas alcohólicas, los vehículos y las labores del tabaco.

### MEDIOAMBIENTE

La deforestación en Bolivia se ha convertido en un grave problema, ya que cada año se destruyen millones de hectáreas de bosques tropicales primarios. Los principales motores de la deforestación son el desmonte de tierras para la agricultura y la ganadería, la tala ilegal y el tráfico de tierras. Más de la mitad de los desmontes infringen las leyes y las normativas medioambientales y los traficantes de tierras suelen trabajar con funcionarios corruptos para falsificar documentos y blanquear registros legales para los mejores postores. Según los informes, los grupos delictivos

utilizan trabajos forzados y amenazan e incluso matan a los líderes indígenas que se les oponen. Además, el tráfico de madera ilegal en Bolivia se considera una mera transgresión administrativa, lo que ha permitido que prolifere el tráfico ilícito. El Estado boliviano ha sido incapaz de controlar este delito, debido a la escasez de infraestructuras y a que los guardabosques están mal equipados.

En cuanto al tráfico de fauna salvaje, el país sirve de puente para el comercio ilegal de especies entre Brasil y Perú. Se trata de la captura de especímenes vivos para el comercio de mascotas y la recolección de partes y productos de animales para el consumo, el uso tradicional o las fiestas religiosas. Las redes sociales han facilitado el comercio y existe un gran mercado de insectos, con la mayoría de las compras realizadas a través de Internet. Las tríadas asiáticas se han apoderado recientemente del mercado y han estado enviando partes de animales, como jaguares, a Brasil y Perú para su envío a los mercados asiáticos. Se han realizado esfuerzos para reforzar las leyes contra la crueldad animal en Bolivia, pero no han sido suficientes, como demuestra el escaso número de procesamientos por caza y pesca prohibidas, destrucción o deterioro de bienes del Estado y biocidio.

Los delitos contra los recursos no renovables en Bolivia se centran principalmente en la minería, el petróleo y el gas, siendo la minería ilegal de oro un importante motivo de preocupación, debido a sus efectos nocivos sobre las poblaciones indígenas locales y el medio ambiente. Las cooperativas de mineros informales, extremadamente poderosas e influyentes, reciben beneficios fiscales y un trato especial por parte del Gobierno. Los mineros ilegales son violentos y poderosos, lo que provoca enfrentamientos con las cooperativas por el derecho a explotar zonas del país. La minería ilegal suele tener lugar en zonas fuera del control del Gobierno, lo que da lugar a otros delitos, como la explotación sexual, el trabajo forzado y el tráfico de drogas y armas. La porosidad de sus fronteras y la debilidad de sus instituciones hacen de Bolivia un país atractivo para el contrabando, ya que los grupos organizados utilizan el país para introducir oro peruano en mercados más grandes. Además, el país pierde millones de dólares por el contrabando ilegal de gasolina subvencionada a los países vecinos, ya que la diferencia de precio hace que el comercio sea rentable.

## DROGAS

Bolivia no es un gran consumidor de heroína, pero su situación estratégica la convierte en un país de tránsito para el tráfico de heroína procedente de sus vecinos: Brasil, Paraguay y Perú. Por otra parte, el mercado de la cocaína en Bolivia es complejo, debido al cultivo legal y al consumo de hojas de coca con fines tradicionales. Casi la mitad de las hojas de coca que se venden se comercializan ilegalmente o se utilizan para usos no tradicionales. Como consecuencia,

Bolivia se ha convertido en el tercer productor mundial de cocaína. Los narcotraficantes utilizan cada vez más a Bolivia como punto de tránsito para los envíos de cocaína, debido al débil control estatal del país y a su situación estratégica. Los cárteles mexicanos y colombianos operan en el país, mientras que las bandas brasileñas controlan el tráfico hacia su país y los envíos a Europa. Para aumentar los envíos de droga y hacer frente al exceso de oferta, se están abriendo nuevas rutas ilegales, especialmente a través de los ríos y el transporte aéreo.

El mercado del cannabis en Bolivia es relativamente pequeño y solo una pequeña proporción de las incautaciones está relacionada con las ventas locales. El consumo de cannabis es ilegal en el país, incluso con fines medicinales, pero las autoridades no persiguen activamente a los consumidores de cannabis. Las organizaciones colombianas facilitan el tráfico a través de las regiones septentrionales vía Perú, con una estructura poco rígida de hombres contratados, mientras que pequeños grupos familiares transportan cannabis a través de la parte meridional del país. Bolivia sirve de paso natural para el cannabis procedente de Paraguay, uno de los mayores productores del mundo, hacia otros mercados, como Chile. La producción local es limitada y está gestionada por grupos informales de bajo nivel y el tráfico y la producción de cannabis suelen estar separados de la cocaína, salvo en algunos casos de microtráfico.

Bolivia es principalmente un país de tránsito de drogas sintéticas, la mayoría de las cuales proceden de Argentina y Brasil. Las drogas sintéticas son caras en Bolivia, pero hay una nueva tendencia hacia el consumo de «LSD chino», ya que la droga es asequible para el mercado local. En general, el consumo de drogas sintéticas es bajo en Bolivia, pero hay indicios de consumo en bares y clubes nocturnos de Cochabamba, así como en institutos de élite. Las drogas farmacéuticas, como el Tramadol, las benzodiazepinas y las anfetaminas, requieren receta médica y son difíciles de obtener. Aunque Bolivia no parece ser un productor de drogas sintéticas, puede permitir la producción en países vecinos, como Argentina, como punto de tránsito de precursores.

## DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los ciberataques son relativamente poco frecuentes en Bolivia y, cuando se producen, suelen tener motivaciones políticas. Por ejemplo, los ataques de denegación de servicio han tenido como objetivo varios sitios web, incluido el sitio oficial del Gobierno boliviano, causando interrupciones temporales en los servicios. En todos los casos relacionados con programas maliciosos, se ha identificado a actores extranjeros como los culpables. Debido a la falta de desarrollo de los servicios estatales, los funcionarios públicos y la Policía no están adecuadamente formados para investigar o identificar este tipo de delitos. Aunque

existe una unidad policial de ciberdelincuencia, su labor se centra principalmente en delitos relacionados con Internet, como la trata de personas, más que en delitos informáticos, como la propagación de virus y otros programas maliciosos.

## DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros en Bolivia se limitan principalmente a delitos oportunistas, en lugar de estar impulsados por grupos delictivos establecidos. Los esquemas piramidales son relativamente raros y ha habido pocos casos de robo digital en bancos privados y gubernamentales. En lugar de ataques generalizados a los sistemas bancarios, se han dado casos de piratas informáticos que han accedido a cuentas, debido a una mala gestión de las contraseñas por parte de los usuarios.

En cambio, el fraude en la contratación pública es habitual en los niveles municipal, departamental y nacional del Estado y el delito suele salir a la luz cuando los nuevos funcionarios asumen sus cargos e investigan a sus predecesores. Este tipo de fraude se ha vuelto casi institucionalizado, debido a la normalización de la corrupción en la sociedad. Los jefes de las instituciones estatales suelen recibir un porcentaje del valor de los contratos públicos que firman y es habitual que se adquieran servicios y bienes sobrevalorados.

## ACTORES CRIMINALES

Las organizaciones criminales bolivianas, en particular los grupos de tipo mafioso, han ganado poder y control en el país, sobre todo en el mercado del contrabando. Estos grupos tienen conexiones de larga data con actores internacionales y funcionarios públicos y, a pesar de las detenciones ocasionales de miembros clave, han podido mantener su influencia a lo largo del tiempo. Los grupos de tipo mafioso también están implicados en el transporte de grandes cargamentos de base de cocaína a países vecinos, como Brasil, Argentina y Paraguay, e incluso Europa y el norte de África. Las redes criminales de Bolivia se dedican a diversas actividades ilegales, como el tráfico de drogas y el contrabando. Los clanes familiares de La Paz y Oruro pueden considerarse pertenecientes a esta categoría, ya que operan de forma poco rígida, moviendo pequeñas

cantidades de cocaína y prestando otros servicios dentro de la cadena del narcotráfico. Algunos incluso están probando su capacidad para producir cocaína base. Del mismo modo, las redes criminales están implicadas en el contrabando y el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales.

Las mafias brasileñas se han disputado el control de las rutas del narcotráfico de cocaína boliviana y peruana en las ciudades fronterizas de Bolivia. Al parecer, la Policía boliviana está investigando la presencia de narcotraficantes brasileños y colombianos en el país y recientes investigaciones han revelado la existencia de ramificaciones de grupos de tipo mafioso brasileños. Los cárteles mexicanos y los traficantes europeos, incluidas las mafias balcánicas e italianas, también están presentes y se ha descubierto que las élites paraguayas están implicadas en el tráfico de drogas en Bolivia. Además, hay indicios de una creciente ruta asiático-boliviana de la droga que utiliza aviones comerciales que viajan de América del Sur al Sudeste Asiático y en la que se utiliza a mujeres bolivianas como mulas para transportar cocaína a estos mercados. Los informes sugieren que los grupos mafiosos venezolanos se han estado beneficiando del tráfico y la trata de personas, debido a la crisis venezolana, y que son cada vez más activos en la región fronteriza chileno-boliviana. El Estado boliviano está plagado de corrupción, con actores integrados en el Estado que facilitan o incluso participan en redes criminales implicadas en diversos mercados ilícitos, como el tráfico de drogas, los delitos financieros y el comercio de productos falsificados. La debilidad de la gobernanza, los bajos salarios y una burocracia poco profesional crean incentivos para la corrupción, el clientelismo y el patronazgo. La crisis del sistema judicial también contribuye a los altos niveles de impunidad de los actores integrados en el Estado implicados en operaciones delictivas. La corrupción en el sistema de justicia ha permitido a actores privados adinerados librarse, mediante sobornos, de las investigaciones de las instituciones encargadas de regular el blanqueo de dinero y controlar la delincuencia. Actores privados colaboran con delincuentes en negocios de diversos sectores, como el inmobiliario, la exportación de madera y el comercio de ganado, así como en clubes de fútbol, concesionarios de automóviles y empresas comerciales.

# RESILIENCIA

## LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Bolivia tiene un historial de débil gobernanza y la intervención del partido político gobernante en el Poder Judicial pone de relieve las debilidades democráticas del país. Aunque

el nuevo Gobierno ha aportado cierta estabilidad al país tras la reciente agitación política, Bolivia sigue estando por debajo de la media regional en la mayoría de los ámbitos de gobernanza. La penetración de la delincuencia en el sistema político es también un problema importante, ya

que los narcotraficantes ocupan puestos políticos claves y el Estado carece de interés en dismantelar los grupos de delincuencia organizada. La incapacidad del país para abordar su histórico conflicto político-social ha dado lugar a la polarización social, la desconfianza institucional y la violencia, incluidas las muertes durante las protestas. Los esfuerzos para abordar la corrupción en Bolivia siguen siendo insuficientes y el país tiene esquemas anticorrupción deficientes y un Estado de derecho débil. A pesar de la implementación de unidades anticorrupción dentro de cada ministerio, la falta de independencia para llevar a cabo investigaciones y la práctica común de que los jefes de las instituciones estatales se lleven un porcentaje del valor de los contratos públicos que firman ponen de manifiesto graves deficiencias en la respuesta al problema. Aunque la ley de información de Bolivia es fuerte sobre el papel, es débil en la práctica, debido a la falta de canales gubernamentales apropiados, y la rendición de cuentas y la transparencia no son prioridades.

Aunque Bolivia es signataria de acuerdos internacionales de lucha contra el crimen organizado, su cumplimiento en la práctica es deficiente. Organizaciones internacionales han criticado a las autoridades bolivianas por incumplir sus obligaciones internacionales. Bolivia recibe financiación y apoyo de otros países y de diversas ONG internacionales para abordar problemas de seguridad, salud, medio ambiente y sociales, incluida la mitigación de la crisis migratoria venezolana. Sin embargo, su relación con Estados Unidos ha sido tumultuosa, con acusaciones políticas en ambas direcciones. El marco jurídico boliviano abarca todo tipo de delitos, pero su aplicación sigue siendo un problema. También son preocupantes las deficiencias en la lucha contra los delitos contra la flora y la fauna, ya que la tala de madera protegida es una infracción administrativa, mientras que su tráfico o transporte no se castiga con penas de cárcel. Asimismo, los permisos para explotar minas son fáciles de obtener y muchos mineros no cumplen las normas antiexplotación, laborales y medioambientales. Además, Bolivia carece de legislación relativa a la detención de personas con notificaciones rojas de INTERPOL en su contra, lo que la convierte en un paraíso para las personas que huyen de la justicia en sus países de origen.

## JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial de Bolivia se considera en general un obstáculo para la lucha contra la delincuencia, con retrasos en los procedimientos penales y redes corruptas de abogados, fiscales y jueces que se aprovechan de las víctimas. Recientes escándalos han sacado a la luz casos de funcionarios y autoridades que favorecen a delincuentes encarcelados condenados por violencia contra las mujeres. Los casos de crimen organizado llevados ante la justicia rara vez dan lugar a condenas o investigaciones penales serias. Esta crisis judicial se atribuye a la interferencia política, la desinstitucionalización, los bajos presupuestos y el inadecuado apoyo tecnológico y técnico. Además, Bolivia

tiene uno de los niveles de ocupación carcelaria más altos de Latinoamérica, con un hacinamiento exacerbado por las detenciones arbitrarias y políticamente motivadas y la continua dependencia de la detención preventiva, incluso cuando viola el Código Penal.

Las fuerzas de seguridad de Bolivia, incluidas la Policía y el Ejército, son objeto de una amplia desconfianza, debido a los abusos contra los derechos humanos, la corrupción y la falta de control. Las malas condiciones de trabajo, la formación inadecuada y los bajos salarios son algunos de los problemas que afectan a las fuerzas policiales, junto con la interferencia política. La Policía se ha visto implicada en sonados casos de narcotráfico y contrabando y se ha pedido una reestructuración completa de los cuerpos de seguridad. La Oficina Nacional de Aduanas, con apoyo militar, es responsable de controlar el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales. Sin embargo, desde que los militares se involucraron en el control del contrabando, el mercado se ha vuelto violento y los clanes utilizan las armas para protegerse.

La integridad territorial de Bolivia está amenazada, debido a la extensa frontera que comparte con países que tienen notables mercados delictivos, fronteras porosas con innumerables pasos ilegales y disputas territoriales con poblaciones indígenas. La lejanía de las fronteras bolivianas, que van desde las grandes altitudes de los Andes hasta la selva amazónica y el Chaco paraguayo, dificulta el control del contrabando y el tráfico ilícito. Además, se ha informado de un aumento de los casos de avasallamiento, en los que grupos invaden tierras, principalmente explotaciones mineras ilegales, y obligan al Gobierno a reconocerlos como propietarios.

## ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Bolivia ha ido mejorando sus capacidades contra el blanqueo de dinero, con la aprobación de varias leyes y decretos contra este delito. Sin embargo, Bolivia sigue siendo uno de los países con mayor riesgo de blanqueo de dinero de Latinoamérica. La corrupción también contribuye a la vulnerabilidad de Bolivia, con funcionarios acusados de blanqueo de dinero en otros países. Además, Bolivia aún tiene que aplicar medidas para prevenir el uso indebido del crowdfunding y los juegos de azar en línea.

La economía boliviana se ha basado tradicionalmente en la explotación de hidrocarburos y minerales y el reciente descubrimiento de vastas reservas de litio ofrece un importante potencial de desarrollo económico. Sin embargo, la dependencia de los recursos minerales impide la diversificación económica y perpetúa el extractivismo, lo que conduce a mayor desigualdad. El sector privado nacional es débil y los elevados impuestos y la burocracia dificultan la creación de empresas formales o de pequeños negocios, lo que contribuye a una de las mayores economías informales del mundo.

## SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

En Bolivia se han promulgado leyes para proteger a víctimas y testigos. Sin embargo, el sistema presenta deficiencias que impiden prestar un apoyo adecuado a las víctimas, sobre todo a las de violencia sexual. Además, las víctimas del tráfico de personas no están protegidas por el Estado y la gran mayoría de las víctimas no han recibido atención ni protección en los dos últimos años. La falta de cooperación y de coordinación entre las agencias gubernamentales en Bolivia actúa como una barrera a los esfuerzos efectivos de prevención, que siguen siendo difíciles de medir. La respuesta del Gobierno a la delincuencia parece centrarse en la destrucción y la incautación de drogas ilegales, más que en la mejora de las condiciones sociales. A pesar de ello, Bolivia ha puesto en marcha una política de coca innovadora, que se centra en el bienestar social, los derechos humanos y la estabilidad económica de las familias cocaleras. Esta política ha demostrado ser eficaz y sostenible para diversificar la economía y fomentar la estabilidad política y económica. La participación directa de las comunidades y las organizaciones de base en la búsqueda de enfoques más eficaces y sostenibles para el control de las drogas ha sido un elemento crucial de su éxito.

Bolivia se considera un país parcialmente libre, debido a sus escasas garantías de los derechos políticos y las libertades civiles. Actores no estatales desempeñan un papel clave en el país, visibilizando los delitos y poniendo de relieve la falta de control gubernamental sobre el tráfico de recursos no renovables y sobre los delitos contra la flora y contra la fauna. Los medios de comunicación han desempeñado un papel importante en la denuncia de la corrupción y de delitos como el narcotráfico. Han puesto el foco en casos concretos, lo que ha dado lugar a detenciones y a una respuesta contundente del Gobierno. Sin embargo, el Gobierno ejerce una presión continua sobre los medios de comunicación y las instituciones no tienen capacidad para mantener los datos actualizados. Las mujeres activistas sufren un acoso constante, que les impide acceder a varias zonas del país, a pesar de haber solicitado protección al Gobierno. Las comunidades indígenas también luchan por hacer valer la protección de sus territorios y a menudo son desoídas por las autoridades oficiales.

---

*Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.*